

La lucha contra el terrorismo

El chantaje terrorista a que ETA —¿cabe seguir distinguiendo dos ramas entre estos «gangsters», con supuesta coartada separatista, sin caer en un juego de complacencias?— ha intentado someter al Gobierno, uno más en su larga carrera de extorsiones, ha sido finalmente entendido en su justa medida: como un intento de chantaje a España entera, al Estado y al pueblo español; al Gobierno, a las Cortes y a cuantas instituciones conforman hoy el edificio de nuestra democracia.

Es, por supuesto, momento de actuar con energía, con el máximo rigor, usando de todos los recursos que permite la Constitución y de aquellos que son práctica habitual —y el ejemplo alemán, el francés o el italiano, cada uno con sus propias singularidades, indican una inequívoca senda a seguir— en los países europeos que se encuentran insertados en un sistema de auténticas libertades. Momento de responder con la máxima dureza a una provocación que, si ha sido constante durante los últimos años, se revela ahora como absolutamente inadmisibles, alcanzando las máximas cotas de la osadía y el cinismo.

Por fin, superadas las etapas de captación de hipotéticas orientelas electorales; atrás definitivamente el tiempo de las transigencias y las timideces, donde se vino confundiendo sistemáticamente el planteamiento político con la necesaria acción de respuesta a cuestiones que no dejaban de ser, en rigor, de orden público, el Gobierno ha dado una respuesta tajante ante la amenaza pendiente sobre las vidas y propiedades de un número indeterminado de españoles. En alguna que otra ocasión, desde estas columnas, se ha insistido en el hecho de que estábamos manteniendo una guerra, guerra sorda, secreta, inconfesada, pero no por ello menos cierta. Una guerra contra el terrorismo de ETA en la que estábamos implicados, con las Fuerzas del Orden, tanto los vascos —primeros afectados, víctimas más cercanas y propicias— como todos los demás españoles de todas provincias y regiones de España. Hace años que los vascos padecen la dictadura del terror, que les somete y coarta y que enmascara a los ojos del resto de los españoles y, por extensión, del mundo entero, su verdadera personalidad, sus legítimas aspiraciones y su futuro. Resultaría absurdo e injusto confundir los términos vasco y terrorista. Las alimañas

de ETA se disfrazan de vascos, pero no lo son. Han conducido a una región entrañable y próspera, con hombres dotados de una serie de virtudes —fortaleza, integridad, laboriosidad— y de singularidades folklóricas y culturales, a una situación de quiebra. Quiebra material y resquebrajamiento moral. Sólo de vez en

cuando oímos manifestarse a un vasco. Hasta la voz parece haberles sido usurpada por los terroristas con el sólo argumento de las bombas y las metralletas.

Ahora —después de que los trágicos y vergonzantes sucesos del pasado verano hayan regresado, con su carga de violencia y de sangre todavía impune— se ha producido el apoyo de los grupos parlamentarios al Gobierno en su lucha contra el terrorismo. Una proposición, no de ley, presentada por los socialistas ha recibido la práctica unanimidad —hay excepciones que producen vergüenza ajena por mucho que no sean más que consecuencia de una inequívoca línea de conducta— del Congreso. No hay, pues, excusas que valgan. No las hay políticas o legislativas ni debe haberlas en el terreno de la acción. La requisitoria contenida en la proposición, para que el Gobierno y con él todas las autoridades «tomen todas las medidas pertinentes tanto a nivel interno como internacional para atajar la acción terrorista con toda la decisión y contundencia que las leyes permiten», debe ser cumplida con la máxima urgencia. Los terroristas de ETA no pueden seguir constituyendo obstáculo para la convivencia de todos los españoles y el pleno ejercicio de las libertades públicas.

Sería injusto no referirnos al retraso con que esta actitud ha sido adoptada por el Congreso. Pagamos —llevamos pagando— muy caras las ausencias de decisión, tanto gubernamentales como parlamentarias. Pero ha llegado la hora de saldar cuentas, una vez que todos se han convencido de que la construcción del Estado no puede llevarse a cabo ignorando un problema de la magnitud social del terrorismo. Sin seguridad ciudadana no hay democracia posible. Y es nuestra seguridad, veraneantes o no, la que está amenazada. Por ello es doblemente dolorosa y vergonzante la ausencia del Partido Nacionalista Vasco de los escaños que le corresponden en el Congreso. Porque el tema de la proposición socialista y el problema del terrorismo afecta a todos los españoles. Las primeras bombas del terrorismo en el territorio vasco